



**NUE 79-A-2021 (GG)**  
**XXXXXXXXXXXXXXXXX contra la Municipalidad de Soyapango**  
**Resolución Definitiva**

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno.

***Descripción del caso***

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, en adelante “la apelante”, en contra de la resolución de referencia UAIP-164-2021, emitida por el oficial de información de la **Municipalidad de Soyapango**, el 26 de mayo de este año.

En ese orden, la apelante presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la **Municipalidad de Soyapango**, solicitud en la que requirió -entre otras cosas-: *“i) fotocopia certificada de acuerdo municipal del día 1 de mayo del 2021, correspondiente al despido de toda la gerencia y jefaturas de toda la administración 2018-2021; y, ii) organigrama y descriptor de puesto certificado.*

Por su parte, el oficial de información de la **Municipalidad de Soyapango** resolvió: “A) conceder el acceso a la información requerida por **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, de conformidad con el artículo 72 letra “c” de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP); B) entregar en este acto formal y materialmente la documentación siguiente: a) fotocopia certificada de Organigrama Municipal, la cual consta de UN folio útil, y b) fotocopia certificada del manual de descripción de puestos de la Unidad Financiera, la cual consta de dos folios útiles, ambas certificaciones extendidas en la Alcaldía Municipal de Soyapango, el día diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, por el Licenciado **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Gerente de Recursos Humanos, conforme con lo requerido (se aclara mediante el referido memo que no se especifica qué unidad o área se solicita en lo referente al manual de descripción de puestos pero al buscar en la base de

datos el nombre de la solicitante se llega a la conclusión que ella estuvo subordinada a la Unidad Financiera porque los distritos dependen de ella en este caso ella se desempeñó en el distrito de plaza mundo)”.

El Instituto admitió la apelación en los términos descritos y designó al Comisionado **Gerardo José Guerrero Larín** para instruir el procedimiento, conforme a lo establecido en los artículos 82 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

Finalizada la instrucción de este procedimiento, el comisionado instructor con la vista de la documentación que yace agregada al expediente en comento, determinó que el caso quedó reducido a una cuestión de derecho, en atención a líneas resolutivas emitidas por este Instituto y de conformidad con los artículos 102 de la LAIP y artículo 309 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), por lo que este pleno resolvió, en el auto que precede a esta resolución, emitir la resolución correspondiente al caso.

### ***Análisis del caso***

El examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** procedencia del procedimiento reducido a una cuestión de derecho; **(II)** consideraciones sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP); **(III)** naturaleza de la información solicitada por la apelante y la posibilidad de que esta sea entregada de conformidad al derecho de acceso a la información pública; y **(IV)** verificar sobre las diligencias de búsqueda.

**I.** De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), en relación con el artículo 135 inciso 3° de la misma norma, se requirió a las partes en este procedimiento, en el auto de admisión, que señalaran si ofrecerían medios probatorios que no constaran en el expediente del trámite de la solicitud relativa al acceso información o que resulte imprescindible la aportación de prueba diferente a la documental. Dicho auto fue notificado el 22 de junio de 2021, y al no haber manifestado las partes su intención de ofrecer prueba, se prescindió de habilitar dicha fase del procedimiento.

De igual forma, la jurisprudencia contencioso administrativa<sup>1</sup> acompaña el criterio seguido por la administración pública, que cuando no se trata de controvertir hechos, sino de la aplicación del derecho al caso en particular, resulta aplicable lo establecido en el artículo 309 del CPCM, normativa supletoria aplicable de conformidad con el artículo 102 de la LAIP referido a que: *"...si hubiese conformidad sobre todos los hechos y el proceso queda reducido a una cuestión de derecho, se pondrá fin a la audiencia preparatoria y se abrirá el plazo para dictar sentencia"*.

Por tanto, la Sala manifestó que la omisión de la audiencia establecida en el artículo 91 de la LAIP, en asuntos de mero derecho, no produce la vulneración del debido proceso en sus manifestaciones de los derechos de audiencia, defensa, congruencia y ausencia de motivación, de dicho artículo y del 102 de la LAIP.

En ese orden de ideas, este Instituto se ve facultado para someter el presente procedimiento de apelación a una cuestión de mero derecho, con base a la aplicación de normas y principios de la LAIP, de conformidad con el artículo 102 de la LAIP y artículo 309 del CPCM.

**II.** El derecho de acceso a la información pública (DAIP) comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público. Este derecho a saber se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del estado democrático de derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a las informaciones en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública.

El acceso a la información pública es un derecho constitucional implícito, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn.) pero que, a pesar de ello, tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión regulado en el artículo 6 de la Cn.

---

<sup>1</sup> Sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, el 28 de enero de 2019, en el proceso de legalidad de referencia 408-2016.

Asimismo, el artículo 2 de la LAIP establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna. Es decir que, al tenor de la citada disposición, para ejercer el derecho de acceso a la información es necesario que la información exista, haya sido generada, administrada, se encuentre en poder del ente obligado al que ha sido solicitada o que exista un mandato normativo de generarla.

El artículo 6 letra "c" de la LAIP, establece que es **información pública** aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial. Para la entrega de la información, la LAIP ha diseñado un proceso expedito en el que los oficiales de información cumplen un rol importante al realizar gestiones encaminadas a satisfacer el derecho de toda persona a acceder a la información pública.

Ahora bien, es necesario tomar en cuenta que este derecho no es absoluto y es susceptible de restricciones condicionantes en su pleno ejercicio. No obstante los límites de este derecho no pueden ser arbitrarios, sino plenamente establecidos por el legislador, a efecto de prevenir que la administración pública utilice discrecionalmente argumentos encaminados a negar la información solicitada por cualquier persona.

Por otro lado, el mismo artículo 6 define la **información pública oficiosa como aquella información pública que los entes obligados deberán difundir al público en virtud de esta Ley, sin necesidad de solicitud directa**. Este tipo de información siempre debe estar a disposición del público, debe divulgarse y actualizarse constantemente, para que los interesados puedan acceder a ella sin ningún inconveniente. Por ello, el artículo 10 de la LAIP establece una serie de ítems de información y/o documentación que los entes obligados deberán divulgar oficiosamente y poner a disposición y conocimiento de los ciudadanos.

En tal sentido, de conformidad con el artículo. 17 de la LAIP, los concejos municipales tendrán como información pública oficiosa las actas de concejo municipal, y las actas que levante el secretario municipal sobre los mecanismos de participación ciudadana, e informe anual de rendición de cuentas. En ese orden, dado que la información objeto de este procedimiento de apelación se encuentra relacionada al acuerdo municipal de fecha 1 de mayo de 2021 y estructura orgánica de una unidad de la Municipalidad, debe entenderse que los datos solicitados no están sujetos, en principio, a ningún tipo de restricción.

**III.** Previo a determinar la naturaleza de la información solicitada por la apelante, es preciso acotar que los documentos ofertados por **XXXXXXXXXXXXXXXX** como anexos a su escrito de apelación, consistentes en: copia de la información contenida en el expediente administrativo relativo al trámite de su solicitud de información, serán valorados como insumos contenidos en el referido expediente los cuales originaron este procedimiento.

Aclarado ello, según consta a folio 17, del expediente administrativo de referencia UAIP-164-2021, bajo el cual la municipalidad de Soyapango diligenció la solicitud de información de la ciudadana apelante, se concedió el acceso a la apelante y se entregó la documentación siguiente: a) fotocopia certificada de Organigrama Municipal, la cual consta de un folio útil, y, b) fotocopia certificada del manual de descripción de puestos de la Unidad Financiera, documentación que consta de dos folios útiles, ambas certificaciones extendidas en la Alcaldía Municipal de Soyapango el día diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, por el Licenciado **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Gerente de Recursos Humanos, lo cual es conforme a la información requerida por la apelante consistente en: [el] organigrama y descriptor de puesto certificado; no así, la información relativa a: ***fotocopia certificada de acuerdo municipal del día 1 de mayo del 2021 correspondiente al despido de toda la gerencia y jefaturas de toda la administración 2018-2021***, sobre la cual el oficial de información de dicha municipalidad no se pronunció ni justificó la falta de entrega de la misma.

En esa línea, el artículo 10 numeral 2 de la LAIP establece que los entes obligados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del público, divulgarán y actualizarán, en los

términos de los lineamientos que expida el Instituto, información relacionada a: “Su estructura orgánica completa y las competencias y facultades de las unidades administrativas, así como el número de servidores públicos que laboran en cada unidad”.

Aunado a lo anterior, el Lineamiento No. 2 para la publicación de información oficiosa, punto 1.2, señala que: “[la] estructura orgánica, debe incluirse el organigrama institucional aprobado por la máxima autoridad del ente correspondiente, una breve descripción de las competencias y facultades de cada unidad, además del número total de empleados que la integran. Como buena práctica se sugiere además desplegar el repertorio de funciones de cada puesto a partir del organigrama de manera que baste posicionar el cursor del mouse o hacer clic sobre la unidad correspondiente e indicar también el nombre y cargo del funcionario responsable de la unidad. Asimismo se considerará buena práctica desagregar la cantidad de empleados en hombres y mujeres”.

En la misma línea, el artículo 17 de la LAIP, establece que: *“Además de la información contenida en el artículo 10, los Concejos Municipales deberán dar a conocer las ordenanzas municipales y sus proyectos, reglamentos, planes municipales, fotografías, grabaciones y filmes de actos públicos; actas del Concejo Municipal, informes finales de auditorías, actas que levante el secretario de la municipalidad sobre la actuación de los mecanismos de participación ciudadana, e informe anual de rendición de cuentas”*. Lo anterior, con relación a lo establecido en el ya citado Lineamiento No. 2, punto 1.23, que señala: *“Los entes obligados conformados por consejos o comisiones deberán publicar sus actas por medio de listados que establezcan la fecha de emisión, el número correlativo, y un enlace que dirija al texto del documento”*.

La Información Pública Oficiosa siempre debe estar a disposición del público y debe divulgarse y actualizarse constantemente, para que los interesados puedan acceder a ella sin ningún inconveniente y sin que medie solicitud de información previa.

En ese sentido, la información que fue denegada al apelante, además de ser de carácter público, debe ser publicada por los entes obligados de manera oficiosa, es decir, para el caso de esta información el legislador previó que dado el interés público del cual

está revestida la misma, esta debe ser publicada de manera oficiosa por los entes obligados a la LAIP garantizando de esta forma el debido ejercicio del derecho de acceso a la información de las y los ciudadanos.

En ese entendido, la no entrega de la información relacionada a la *fotocopia certificada de acuerdo municipal del día 1 de mayo del 2021 correspondiente al despido de toda la gerencia y jefaturas de toda la administración 2018-2021*, solicitada por la apelante, objeto de conocimiento en este procedimiento, es de naturaleza pública-oficiosa y por tanto, compete al ente obligado realizar las gestiones internas necesarias para que esta sea de fácil acceso a la población, concretizando la misma o procesandola de forma oportuna y eficaz, sin incurrir en dilaciones indebidas que no responde a los principios establecidos en el artículo 4 de la LAIP.

**IV.** Por otra parte, en relación al requerimiento de información referente al *organigrama y descriptor de puesto certificado*, solicitado por la apelante, es pertinente aclarar que de la documentación adjuntada por la apelante al recurso de apelación presentado el 11 de junio de este año y de la resolución emitida por el oficial de información de la Municipalidad en fecha 26 de mayo de este año, se determina que esta ya fue proporcionada a la apelante en tiempo y forma según fue requerida.

Es por ello, que el ente obligado cumple con sus obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información pública, al establecer en la resolución lo siguiente: “*se clasifican como información pública de carácter oficiosa, según el artículo 10 N.º 1 y 2 y artículo 17 de la LAIP; por lo que, al generarse este tipo de documentos el ente obligado; es decir, la municipalidad lo debe publicar en el Portal de Transparencia Municipal debiendo actualizarse cada tres meses, sin que medie solicitud alguna. No así, las certificaciones que solo procede su extensión y entrega a petición de parte interesada mediante solicitud presentada conforme a la ley, debiendo sufragar los costos de su reproducción*”.

En consecuencia, visto el contenido de la documentación relacionada en la presente resolución y la fundamentación expuesta, se ha de ordenar al ente obligado únicamente la

entrega de *la fotocopia certificada de acuerdo municipal del día 1 de mayo del 2021 correspondiente al despido de toda la gerencia y jefaturas de toda la administración 2018-2021*. No obstante lo anterior, se advierte que la misma debe consignar los nombres de los servidores públicos que fueron destituidos, por lo que, de acuerdo al criterio de confidencialidad de los nombres de los servidores públicos decretada por la Sala de lo Contencioso Administrativo y adoptada por este Instituto en las últimas resoluciones<sup>2</sup>, se ordenará a la **Municipalidad de Soyapango** hacer la entrega en versión pública del acuerdo municipal del día 1 de mayo del 2021 emitido por el Concejo Municipal de dicha municipalidad, salvo que dentro de dicho acuerdo se establezca información concerniente a la ciudadana apelante, en cuyo caso ésta no deberá ocultarse.

### ***Decisión del caso***

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con los artículos 6 y 18 de la Cn., 94, 96 letra “d” y 102 de la LAIP, 134 y 134 de la LPA, este Instituto **resuelve**:

**a) Modificar** la resolución venida en apelación bajo la referencia UAIP-164-2021 emitida el 26 de mayo de este año, por el oficial de información de la **Municipalidad de Soyapango**, por las razones antes mencionadas.

**b) Confirmar** la entrega de la información siguiente: “**organigrama y descriptor de puesto certificado**”, de conformidad a lo expuesto en el romano III del apartado “Análisis del caso”.

**c) Ordenar** al titular o máxima autoridad de la **Municipalidad de Soyapango** que, en el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución, gire instrucciones a su oficial de información a efecto de entregar a la apelante **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, la información consistente en: “**fotocopia certificada**

---

<sup>2</sup> Resolución Definitiva, Referencia NUE 30-A-2020, de las ocho horas con un minuto del treinta de abril de dos mil veintiuno. Este Instituto como ente garante del DAIP y del Derecho a la Protección de Datos Personales (DPD), pero sobre todo de la legalidad de sus actos sujetos a control jurisdiccional conforme a lo dispuesto en el art. 172 de la Constitución de la República, para el caso, a través de la jurisdicción contencioso administrativa -art. 2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa-, considera oportuno adoptar la interpretación emitida por la referida Sala, (...), por lo que los nombres de los servidores públicos son datos personales y por ende, información confidencial.



**de acuerdo municipal del día 1 de mayo del 2021, correspondiente al despido de toda la gerencia y jefaturas de toda la administración 2018-2021”,** por tratarse de información pública oficiosa. Esta acta se deberá entregar en versión pública de conformidad al artículo 30 de la LAIP.

**d) Ordenar a la Municipalidad de Soyapango** que, a través de su titular, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo estipulado en el literal que antecede de esta parte resolutive, remita a este Instituto un informe de cumplimiento, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada al apelante, así como su recepción; bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: [oficialreceptor@iaip.gob.sv](mailto:oficialreceptor@iaip.gob.sv).

**e) Remitir** el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

**f) Hacer saber** a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, de conformidad con el artículo 131 de la LPA, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

**g) Publíquese** esta resolución, oportunamente.

***Notifiquese.-***

-----GERARDO J. GUERRERO-----R. GÓMEZ-----A. GREGORI-----

**PRONUNCIADA POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA  
SUSCRIBEN””””””””””””””””RUBRICADAS”””””””””””””””**

SP/JH